



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SINALOA

Culiacán, Sinaloa, 31 de julio de 2023
Oficio: CEDH/VG-CT/06/2023

Con la finalidad de poner a disposición del público las Recomendaciones emitidas por esta Comisión Estatal en el periodo 1998-2007, previo proceso de digitalización, me permito solicitar a los integrantes del Comité de Transparencia de esta CEDH, analice la propuesta de esta Visitaduría General, en el sentido de eliminar u omitir las partes o secciones clasificadas como confidenciales de dichas resoluciones, de conformidad con lo previsto por los artículos 141 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior permitiría la publicación de tales documentos en nuestra página web, facilitando así el acceso a su contenido en versión pública.

En esa tesitura, someto a su consideración la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes a los años 1998 a 2007, por contener información concerniente a personas físicas identificadas o identificables tal como lo establece el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y de acuerdo a lo previsto por la fracción II del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.

Por lo anterior, de manera general y enunciativa más no limitativa, señalo los datos a testar en los documentos en cuestión, mencionando que cada Recomendación deberá acompañarse de un listado con los datos específicos que sean eliminados u omitidos.

Datos a testar
Nombre de persona(s) quejosa(s)
Nombre de víctima(s)
Nombres de menores de edad
Nombres de testigos
Nombres de civiles
Nombres de personas servidoras públicas
Nombres de autoridades responsables
Nombres de presuntos responsables
Número de averiguaciones previas
Número de carpetas de investigación
Folio de denuncia penal

Edad
Estado civil
Domicilios particulares y/o ubicaciones específicas
Escolaridad
Ocupación
Nacionalidad
Fechas de nacimiento
Media filiación y rasgos particulares
Números telefónicos
Número de seguridad social o análogo
RFC
CURP
Matrículas, series y descripciones vehiculares y de motocicletas
Números de vehículos oficiales y matrículas
Folios de identificaciones oficiales
Nombres de empresas
Nombres de poblados
Número de escrituras públicas
Número de series y matrículas de armas de fuego
Claves catastrales, entre otros.

Quedo de ustedes.

Atentamente


Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza
Visitador General y Presidente
del Comité de Transparencia





COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SINALOA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia

En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las nueve horas con diez minutos del día primero de agosto de dos mil veintitrés, constituidos previa convocatoria los integrantes del Comité de Transparencia de esta Comisión, Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General; Mtro. Miguel Ángel López Núñez, Secretario Técnico y Lic. Daniela Verdugo Mejía, Directora de Administración, con carácter de Presidente y Vocales respectivamente, en la sala de juntas de este organismo público, ubicada en calle Ruperto L. Paliza 566 Sur en la colonia Miguel Alemán, en esta ciudad, con la finalidad de analizar la propuesta contenida en el oficio número CEDH/VG-CT/06/2023 de fecha 31 de julio de 2023 suscrito por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General de esta CEDH, por medio del cual pone a consideración la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes a los años 1998 a 2007 emitidas por esta Comisión Estatal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 fracción II y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

I. PASE LISTA DE ASISTENCIA

El Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General, en su carácter de Presidente de este Comité de Transparencia, cede el uso de la voz al Mtro. Miguel Ángel López Núñez, Secretario Técnico de esta CEDH, para tomar lista de asistencia, quien hace constar que se encuentran presentes todos los integrantes de este Comité.

II. DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Mtro. Miguel Ángel López Núñez, declara que en virtud de que nos encontramos presentes los integrantes del Comité, existe quórum legal para sesionar, por lo que el presidente de este Comité declara instalada la sesión.

III. ASUNTOS A TRATAR Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En este numeral se somete a consideración de los integrantes de este Comité los puntos a tratar en esta sesión:

Pase de lista.

Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión.

Resolución correspondiente a la propuesta contenida en el oficio número CEDH/VG-CT/06/2023 de fecha 31 de julio de 2023, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General de esta CEDH, por medio de la cual solicita la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales, que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes al periodo 1998-2007 emitidas por esta CEDH.

Por UNANIMIDAD se aprueba el orden del día de esta Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

IV. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO CONFIDENCIALES, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO CEDH/CT/12/2023.

Una vez expuesta la propuesta de resolución del Comité, el Mtro. Miguel Ángel López Núñez recoge los votos y da cuenta de que por UNANIMIDAD se resuelve confirmar la clasificación de los datos personales por considerarse confidenciales, que se encuentran en las Recomendaciones en cuestión.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados todos los puntos previstos en el orden del día, el Presidente del Comité clausura la sesión, siendo las 9:50 horas del día 01 de agosto de 2023.


Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza
Visitador General y Presidente
del Comité de Transparencia


Mtro. Miguel Ángel López Núñez
Secretario Técnico y Vocal
del Comité de Transparencia


Lic. Daniela Verdugo Mejía
Directora de Administración y
Vocal del Comité de Transparencia





COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SINALOA

EXPEDIENTE NÚMERO: CEDH/CT/12/2023

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Culiacán Rosales, Sinaloa, al día uno del mes de agosto de dos mil veintitrés.

Analizado el expediente citado al rubro, formado con motivo de la petición formulada por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General de esta CEDH, por medio de la cual solicita la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones emitidas por esta Comisión Estatal en el periodo 1998-2007, este Comité de Transparencia integrado de acuerdo a lo previsto por el artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General y Presidente de este Comité de Transparencia; Mtro. Miguel Ángel López Núñez, Secretario Técnico de esta CEDH; y Lic. Daniela Verdugo Mejía, Directora Administrativa y Vocales de este Comité, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, emite la presente resolución:

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. La petición de referencia fue presentada por el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, Visitador General de esta CEDH, por medio de la cual solicita la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes al periodo 1998-2007, emitidas por esta Comisión.
2. Recibido el oficio antes citado, este Comité de Transparencia lo integró al expediente en el que se actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

II. COMPETENCIA

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 66 fracción II y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. El Visitador General sustenta su petición a través de las siguientes consideraciones y fundamentos:

Con la finalidad de poner a disposición de las personas usuarias las Recomendaciones emitidas por esta Comisión Estatal en el periodo 1998-2007, previo proceso de digitalización, me permito solicitar a los integrantes del Comité de Transparencia de esta CEDH, analice la propuesta de esta Visitaduría General, en el sentido de eliminar u omitir las partes o secciones clasificadas como confidenciales de dichas resoluciones, de conformidad con lo previsto por los artículos 141 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior permitiría la publicación de tales documentos en nuestra página web, facilitando así el acceso a su contenido en versión pública.

En esa tesitura, someto a su consideración la clasificación de los datos personales considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones correspondientes a los años 1998 a 2007, por contener información concerniente a personas físicas identificadas o identificables tal como lo establece el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y de acuerdo a lo previsto por la fracción II del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.

Por lo anterior, de manera general y enunciativa más no limitativa, señalo los datos a testar en los documentos en cuestión, mencionando que cada Recomendación deberá acompañarse de un listado con los datos específicos que le sean eliminados u omitidos.

Datos a testar
Nombre de persona(s) quejosa(s)
Nombre de víctima(s)
Nombres de menores de edad
Nombres de testigos
Nombres de civiles
Nombres de personas servidoras públicas
Nombres de autoridades responsables
Nombres de presuntos responsables
Número de averiguaciones previas
Número de carpetas de investigación
Folio de denuncia penal
Edad
Estado civil

Domicilios particulares y/o ubicaciones específicas
Escolaridad
Ocupación
Nacionalidad
Fechas de nacimiento
Media filiación y rasgos particulares
Números telefónicos
Número de seguridad social o análogo
RFC
CURP
Matrículas, series y descripciones vehiculares y de motocicletas
Números de vehículos oficiales y matrículas
Folios de identificaciones oficiales
Nombres de empresas
Nombres de poblados
Número de escrituras públicas
Número de series y matrículas de armas de fuego
Claves catastrales, entre otros.

(...)”

SEGUNDO. El artículo 165 establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada o identificable. Asimismo, el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, dispone que se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, ya sea numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo.

En el mismo sentido, el arábigo y fracción citados en última instancia, establece de manera enunciativa más no limitativa, que una persona es identificada o identificable en cuanto a sus características físicas y los siguientes datos generales: nombre, edad, sexo, estado civil, escolaridad, nacionalidad, número telefónico particular, correo electrónico no oficial, huella dactilar, ADN, número de seguridad social o análogo y Registro Federal de Contribuyente.

TERCERO. A partir de lo antes expuesto, y tomando en cuenta la relevancia de publicar dichas Recomendaciones en versiones públicas a efecto de que se encuentren disponibles para consulta del público resulta procedente CONFIRMAR la declaración de clasificación de los documentos en cuestión.

Al momento de elaborar las versiones públicas de las Recomendaciones mencionadas en el oficio número CEDH/VG-CT/06/2023 y de la presente resolución, el Visitador General deberá testar sólo aquellos datos personales que en ellos se consignent, en apego a lo previsto en el artículo 160, 165 de la Ley de Transparencia estatal, en relación con el

artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable en la materia.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 66 fracción II, 141 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

IV. RESOLUCIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se CONFIRMA por unanimidad la clasificación de los datos considerados como confidenciales que se encuentran en las Recomendaciones enunciadas, según lo precisado en los puntos de Consideraciones y Fundamentos de esta resolución, autorizando la elaboración de las versiones públicas.

NOTIFÍQUESE al Visitador General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa para el efecto conducente.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, en la Décima Sesión Extraordinaria de fecha 01 de agosto de 2023, por unanimidad de votos de sus Vocales, los cuales son enunciados al rubro, haciendo constar que a la fecha de la presente resolución no existe nombramiento de Titular de Datos Personales.


Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza
Visitador General y Presidente
del Comité de Transparencia


Mtro. Miguel Ángel López Núñez
Secretario Técnico y Vocal
del Comité de Transparencia


Lic. Daniela Verdugo Mejía
Directora de Administración y
Vocal del Comité de Transparencia



EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE ELIMINARON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NOMBRE DE LOS CIUDADANOS, EDADES, OCUPACIONES, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN III, 149, 155 FRACCIÓN III, 156 Y 165 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES TRIGÉSIMO OCTAVO FRACCIÓN I, QUINGUAGÉSIMO SEGUNDO PÁRRAFO SEGUNDO, QUINGUAGÉSIMO TERCERO, QUINGUAGÉSIMO NOVENO, SEXAGÉSIMO SEGUNDO Y SEXAGÉSIMO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. PERIODO DE RESERVA PERMANENTE.



COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
SINALOA

EXPEDIENTE No. CEDH/IX/SP/036/01

RESOLUCION: RECOMENDACION

No. 041/01

AUTORIDAD DESTINATARIA:

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SINALOA.

TRIBUNAL DE BARANDILLA DE SINALOA.

--- Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil uno en curso.-----

--- **VISTO** para resolver el expediente número CEDH/IX/SP/036/01 integrado con motivo de la investigación iniciada de oficio por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos durante la gira de trabajo realizada por el municipio de Sinaloa, Sinaloa, el 26 de octubre del año 2001 en curso y,-----

----- **RESULTANDO** -----

--- **1o.** Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7o., fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, según el cual ésta debe "*supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social de Sinaloa, así como en las diversas corporaciones policiacas y en los centros de reclusión o detención*", diseñó un programa de trabajo de carácter general a fin de precaver, como lo contempla la ley, la violación a derechos humanos de quienes, por diversas circunstancias, se encuentren privados de su libertad física.-----

--- **2o.** Que en cumplimiento de ese programa de trabajo, el 26 de octubre del año 2001 en curso, personal de esta Comisión llevó a cabo una visita de inspección en las instalaciones de esa naturaleza de dicho municipio, corriendo la misma a cargo del licenciado **SP1**, Visitador Adjunto de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, acompañado del C.

SP2, prestador del servicio social profesional de la misma, actividad que llevó a cabo en ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus responsabilidades.-----



COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
SINALOA

- - - 3o. Que del resultado de dicha visita de inspección, en ejercicio de las facultades fedatarias que al Presidente, Visitador General y Visitadores Adjuntos otorga el artículo 17, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 del mismo ordenamiento, se levantó el acta circunstanciada correspondiente, misma que corre agregada al expediente del caso. -----

- - - 4o. Que siendo las 16:15 horas del día señalado, el visitador de este organismo se constituyó en la oficina del Tribunal de Barandilla, entendiendo la diligencia con quien dijo ser el licenciado **SP3** y desempeñar el cargo de juez de dicho tribunal.-----

- - - 5o. Que el visitador de esta Comisión preguntó al licenciado **SP3** si el municipio contaba con Bando de Policía y Buen Gobierno, respondiendo en sentido afirmativo, añadiendo que, incluso, tenía en su poder un ejemplar de dicho ordenamiento, el cual fue publicado en "El Estado de Sinaloa", órgano oficial del gobierno del Estado, de 12 agosto de 1994.-

- - - 6o. Que la investigación de referencia se llevó a cabo, por un lado, a través del desahogo de un cuestionario escrito, formulado exprefeso, así como mediante una entrevista personal, que en ambos casos se entendió con dicho servidor público.-----

- - - Por lo que hace al cuestionario, las preguntas que comprendió fueron las que enseguida se anotan, a las que se respondió en la forma que en cada caso se precisa:-----

"P. 1. ¿Cuántos procedimientos se iniciaron con la recepción del parte informativo de policía del 1o. de enero al 30 de septiembre del año 2001 en curso?.

"R. 115

"P. 2. En éstos ¿participaron menores de edad?

"R. Sí (X) No ()

"P. 2.1. Si la respuesta es afirmativa, sustentarla documentalmente.

"R. Se presentaron tres casos al visitador.



"P. 2.2. Si es negativa, mostrar el archivo de tales partes policiacos.

"R. (Observación del Visitador: dado que la respuesta fue negativa, no se le mostró ninguno).

"P. 3. ¿Cuántas denuncias de particulares fueron presentadas del 1o. de enero al 30 de septiembre del año 2001 en curso?

"R. 8 denuncias.

"P. 4. De éstas ¿cuántas correspondieron a menores de edad?

"R. Una.

"P. 5. ¿Qué procedimiento siguió respecto a los menores que fueron puestos a disposición de ese tribunal o denunciados por particulares?

"R. Llamamos a los padres de los menores infractores, platicamos con ellos exponiéndoles el motivo de su detención, y si el caso amerita, le imponemos una amonestación, y se los entregamos a ellos como responsables, y si no al delegado del CONTUME.

"P. 6. En el ejercicio del 1o. de enero al 30 de septiembre del año 2001 en curso:

"P. 6.1. ¿Cuántas amonestaciones dictó?

"R. 29 amonestaciones se dictaron.

"P. 6.2. ¿Cuántas multas decretó?

"R. 42 multas pecuniarias se decretaron.

"P. 6.3. ¿Cuántos arrestos impuso?

"R. 38 arrestos.

"P. 6.4. ¿A cuántas personas condenó al trabajo comunitario?

"R. 4 personas realizaron trabajo comunitario.

"P. 6.5. ¿A cuántas personas sentenció a reparar el daño?

"R. Ninguno.

"P. 7. ¿Existe personal de la Dirección de Defensoría de Oficio para auxiliar en su defensa a los presuntos infractores de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno?.

"R. Sí () No (X)

"P. 7.1. Si la respuesta es afirmativa, precisar nombres de los abogados, fechas y horarios de trabajo y antigüedad en el mismo.

"R. No hay.

"P. 8. ¿Cuenta con secretario ese tribunal?

"R. Sí () No (X)

"P. 8.1. Si la respuesta es afirmativa, precisar nombres, horario de trabajo y antigüedad.

"R. No hay.

"P. 9. En el ejercicio del 1o. de enero al 30 de septiembre del año 2001 en curso ¿cuántos recursos se promovieron en contra de la resolución de ese tribunal?.

"R. Ninguno.

"P. 10. De éstos, precisar ¿cuántos revocaron su resolución, cuántos la modificaron y cuántos la confirmaron?.

"R. Ninguno --porque no se interpuso Recurso alguno.

- - - 7o. Que con relación a lo anterior, se solicitó de dicho servidor público explicara el procedimiento que seguía cuando ponían a su disposición a un presunto infractor del Bando de Policía y Buen Gobierno, a lo que contestó de la siguiente manera:-----

"a) Que checa y analiza la falta en el libro de registro de los partes informativos elaborados por los agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;

"b) Que platica con el presunto infractor y le hace saber su situación jurídica;

"c) Que para aplicar la sanción se basa en el motivo de la detención, así como de la declaración del presunto infractor.



"d) Que les informa del derecho que tienen de hacer una llamada estando detenidos;

"e) Que les informa del derecho que tienen de tener una defensa adecuada por sí mismo, por abogado o por una persona de su confianza.

"f) Que les dice que si no están conforme con la sanción impuesta, pueden interponer el recurso de revisión en contra de la misma."

- - - 8o. Que después de entrevistar al juez del Tribunal de Barandilla, el visitador examinó al azar cinco casos que fueron conocidos y resueltos por servidores públicos de dicho Tribunal, diligencia que se asentó en el acta respectiva, de la que se reproducen los pasajes pertinentes. Son los siguientes: - - - - -

"Sinaloa, Sinaloa, a 26 de octubre del 2001, 16:15 horas, entrevista con el licenciado **SP3**, Juez del Tribunal de Barandilla. Examen de casos:

"1o. **C1**, años, domicilio conocido Sinaloa, Sinaloa.

"a) Causa de detención: Escandalizar en la vía pública.

"b) Sanción que le fue impuesta: Amonestación.

"c) Oficio u ocupación:

"2o. **C2**, años, domicilio conocido Sinaloa, Sinaloa.

"a) Causa de detención: Escandalizar en la vía pública.

"b) Sanción que le fue impuesta: Amonestación.

"c) Oficio u ocupación:

"3o. **C3**, años, domicilio conocido Sinaloa, Sinaloa.

"a) Causa de detención: Escandalizar en la vía pública.

"b) Sanción que le fue impuesta: Amonestación.

"c) Oficio u ocupación:



"4o. C4 , años, domicilio conocido Cubirí de la Cuesta, Sinaloa, Sinaloa.

"a) Causa de detención: No se especifica. Al referirse a tal aspecto dice "parte informativo".

"b) Sanción que le fue impuesta: Multa. No se especificó el monto.

"c) Oficio u ocupación:

"5o. C5 , años, domicilio conocido Cubirí de la Cuesta, Sinaloa, Sinaloa.

"a) Causa de detención: No se especifica. Al referirse a tal aspecto dice "parte informativo".

"b) Sanción que le fue impuesta: Multa. No se especificó el monto.

"c) Oficio u ocupación: .

- - - **OBSERVACIONES.** No hay constancia de que se hagan las notificaciones correspondientes a los interesados a fin de que ejerzan su derecho a la defensa, ya sea por sí mismos o por conducto de persona de su confianza; no se asienta en ningún acta si se les hace saber o no de dicho derecho estando detenidos, así como el que tienen de interponer recurso de revisión en contra de la resolución dictada, en el supuesto, claro, de no estar de acuerdo con la misma (artículos 36 y 38, fracción V, última parte, de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado), lo cual permite presumir que ninguna notificación de ese tipo se hace, pues, en los casos examinados, si dichas notificaciones se hubieren hecho sin duda hubieran sido asentadas en algún documento o se vería reflejado con las actuaciones correspondientes, pero nada de ello se apreció en ese sentido. -----

- - - Expuesto lo anterior y, -----

----- **CONSIDERANDO** -----

- - - I. Que en razón de que las instalaciones que se inspeccionaron son de naturaleza municipal y las actuaciones que se examinaron corresponden a personal del Tribunal de Barandilla del municipio de Sinaloa, de conformidad con lo estatuido por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 bis, de la Constitución Política del Estado; 1o.; 2o.;



3o.; 5o.; 7o.; 16, fracción IX, y demás relativos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este organismo es competente para conocer y resolver sobre la cuestión imbita en el caso que culmina con la presente resolución. -----

- - - II. Que en la presente resolución son dos los aspectos a examinar: por un lado, si el Tribunal de Barandilla del municipio de Sinaloa está facultado para conocer de casos de menores infractores y, por otro, si el proceder de los servidores públicos del tribunal referido, en el procedimiento que siguen cuando ponen a su disposición a un presunto infractor del Bando de Policía y Buen Gobierno, se ajusta o no a Derecho, es decir, si actúa con apego o no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la Constitución Política del Estado; a la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado y al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio.-----

- - - III. Que con relación al primero de los aspectos enunciados, esto es, si el Tribunal de Barandilla del municipio de Sinaloa está facultado para conocer de casos de menores por infracciones administrativas, el examen debe hacerse, naturalmente, a la luz de las disposiciones, tanto de orden constitucional como secundario, que establecen las atribuciones de las autoridades o servidores públicos, razón por la que resulta pertinente recordar lo que establece, en la parte que interesa, el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice así:-----

"Artículo 14.
.....

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".
.....

- - - El precepto transcrito estatuye lo que la doctrina conoce como "*debido proceso legal*", y como se desprende del mismo numeral, significa que a ninguna persona se le privará de los derechos enunciados en él sino por la decisión de tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades



esenciales del procedimiento y con apoyo en las leyes vigentes expedidas con anterioridad del acto que se juzga. -----

--- Lo anterior significa que el ejercicio de los derechos citados --de los que goza toda persona en nuestro país-- encuentra su limitación en el cuerpo mismo de la Constitución, siempre que se cumplan las exigencias estatuidas en el artículo 14 de la carta magna, de modo que cualquier acto de privación de esos derechos fuera del cumplimiento de las exigencias del debido proceso legal es inconstitucional y, por ende, transgresor de derechos humanos. -----

--- Asimismo, es pertinente recordar lo que la propia ley fundamental estatuye en cuanto a la distribución de competencias en materia de menores infractores. Esto se localiza en el artículo 18 que, en lo concerniente a tal aspecto, dispone lo siguiente: -----

“Artículo 18. (...)

“La Federación y los gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores.”

--- De acuerdo con la disposición anterior, en nuestro país deben existir, por un lado, en el orden federal, y por otro, en la pluralidad de órdenes locales, instituciones especiales responsables del tratamiento de menores infractores, es decir, de aquellas personas que sin cumplir los 18 años despliegan conductas que se adecuen a algún supuesto del Código Penal del Estado o Bando de Policía y Buen Gobierno municipal, casos en los cuales se actualiza la competencia de un tipo u otro de las instituciones especiales de referencia, según, claro, su competencia por razón de materia o territorio. -----

--- Continuando con el estudio de la cuestión, requiérese ahora abordar el examen de un ordenamiento local, como es la Ley Orgánica Municipal del Estado, que en la parte que resulta aplicable al caso dice lo siguiente: -----

“Artículo 20. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de gobernación, las siguientes:

“VI. **Cuidar que la intervención del cuerpo de policía en los casos de infracciones cometidas por menores de edad, se limite a ponerlos inmediatamente a disposición del Consejo Tutelar de Menores, a través de su delegado municipal;**”



- - - Como se puede apreciar, la disposición es tan clara que no requiere mayor explicación; todo, en torno de ello, se tiene que limitar prácticamente a insistir en lo que ella establece, que en el fondo son dos cosas: por un lado, el poder-deber del Ayuntamiento de cuidar que la intervención de los cuerpos de policía --pudiera interpretarse en forma amplia que de cualquiera-- en los casos de menores de edad que sean sorprendidos en flagrancia de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno o en la comisión de una conducta tipificada en la ley como delito, se limita a ponerlos **inmediatamente** a disposición del Consejo Tutelar para Menores, a través del Delegado Municipal, y por otro, que la policía debe hacer eso **inmediatamente**, esto es, luego de que se produzca su intervención, salvo el tiempo estrictamente necesario para la formulación de los partes y oficios que sean necesarios para dejar constancia de su actuación y cumplir con sus deberes.-----

- - - Por otro lado, para complementar lo analizado, resulta necesario examinar algunos preceptos de la Ley Orgánica del Consejo Tutelar para Menores del Estado. Son los siguientes: -----

"Artículo 1o. Se declara función social del Estado, la defensa y protección de los menores de 18 años de edad, cuando se encuentran desvalidos o abandonados social y materialmente, pervertidos o en peligro de estarlo, que no puedan ser corregidos por quienes los tienen a su cargo, o que hayan cometido una infracción de carácter penal o a los reglamentos de Policía y Buen Gobierno".
.....

"Artículo 4o. Los menores a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley en su parte última, en ningún momento y por ningún motivo podrán ser detenidos o perseguidos criminalmente ni sometidos a proceso ante las autoridades ordinarias".
.....

"Artículo 76. *Tan pronto como las autoridades judiciales, el Ministerio Público o las autoridades municipales comprueben que la persona conducida a su jurisdicción es menor de edad, **suspenderán sus diligencias y ordenarán que éste sea trasladado inmediatamente** al Consejo Tutelar para Menores, o a la Dependencia que esté más cercana informando circunstancialmente sobre los hechos en que hubiere intervenido el menor.*

"*Al funcionario infractor de esta disposición se le castigará por el delito de abuso de autoridad. Incurrirá en igual delito al (sic) (el) funcionario que ordene la detención de menores en lugares destinados a mayores, aun cuando sea por breves momentos*".



- - - El primero de estos numerales establece en forma clara --acorde con lo dispuesto por el artículo 18 constitucional, cuyo examen ya abordamos-- que en Sinaloa el dispositivo jurídico que regula lo concerniente a menores infractores debe armonizar con lo que --como ley especial que es-- preceptúe la Ley Orgánica del Consejo Tutelar para Menores del Estado, y dicho cuerpo legal, de manera clara estatuye que cualquier menor que adecue su conducta a supuestos normativos del Código Penal, leyes penales especiales o de un Bando de Policía y Buen Gobierno, *ipso facto* operan en su favor las disposiciones de la ley en cita.-

- - - En el mismo tenor, el artículo 76 transcrito delimita en forma categórica y contundente que a quien se le surte la competencia para conocer de las conductas infractoras de los Bandos de Policía y Buen Gobierno municipales o de las que se adecuan a alguna de las figuras típicas del Código Penal del Estado o leyes penales especiales, cuando dichos procederes provinieren de menores de edad, es en favor del Consejo Tutelar para Menores, y no puede interpretarse de otra manera porque dicho numeral excluye claramente a los agentes del Ministerio Público --incluyendo elementos de Policía Ministerial, que por disposición del artículo 21 constitucional se encuentran bajo su mando-- a las autoridades judiciales y a las municipales --policía preventiva, incluso-- para conocer dichas conductas. -----

- - - En opinión de este organismo, lo prevenido por estos numerales sustentan, junto con lo estatuido por el artículo 18 constitucional --y tratados internacionales que regulan la materia de menores-- la conclusión de que la única institución del Estado competente para conocer de conductas antisociales ejecutadas por menores de edad es, al menos hasta esta fecha, el Consejo Tutelar para Menores.-----

- - - En otro orden de ideas, continuando con el estudio, toca ahora examinar algunos artículos de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado. Son los siguientes: -----

"Artículo 14. En tratándose de menores de edad, de personas mayores de setenta años, de inválidos, dementes y mujeres con notorio estado de embarazo no procederá privación de la libertad".

"Artículo 17. Si el infractor fuere menor de edad el tribunal exhortará a los padres, tutores o a quienes ejerzan la patria potestad para que adopten las medidas necesarias con objeto de evitar nuevas infracciones y les hará cubrir el importe de



la multa si éste procede, sin contravención a lo que establezca (sic) (establezcan) otras disposiciones legales".

- - - El primero de los preceptos transcritos estatuye, armoniosamente con el artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los numerales 4o. y 76, de la Ley Orgánica del Consejo Tutelar para Menores, que los menores de edad no podrán ser objeto de arresto administrativo, es decir, a ser privados de libertad de ambulatoria; sin embargo, el artículo 17 de la ley que se examina dispone una antinomia respecto al espíritu del legislador plasmado en el artículo 18 constitucional citado, así como en lo estatuido por la Ley Orgánica del Consejo Tutelar para Menores --que como dijimos es la ley específica que regula lo relativo a los menores de edad cuando éstos intervienen en la perpetración de conductas antisociales-- porque de acuerdo con el mandato constitucional en nuestro país hay una institución especializada para el tratamiento de menores infractores: el Consejo Tutelar para Menores; a su vez, la ley que creó a dicho Consejo, en su artículo 76, dispone terminantemente que cualquier autoridad judicial, agente del Ministerio Público o servidor público municipal, al advertir que un menor de edad está a su disposición, **de inmediato** debe turnarlo a la autoridad competente para que conozca de su conducta cuando la misma sea, desde luego, antisocial, autoridad que no es otra que el Consejo Tutelar para Menores --o Delegación del mismo en la localidad que corresponda-- de ahí que, en concepto de esta Comisión, resulta ilógico y antijurídico que el artículo 17 de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado estatuya que los menores serán sujetos a pago de multa --así sea a través de sus padres-- por haber desplegado conductas que se estimen antisociales, simple y sencillamente porque el único órgano competente para conocer de ese tipo de conductas de menores, se reitera, es el Consejo Tutelar para Menores, que es al que, en todo caso, corresponde analizar la conducta del menor infractor y decidir qué sanciones podrá imponer y qué tratamiento habrá de aplicársele para dar cumplimiento a la función de tutela del Estado, de ahí que esta Comisión considere que lo establecido por los artículos 4o. y 76, de la Ley Orgánica para el Consejo Tutelar para Menores del Estado, deben prevalecer respecto de lo estatuido por el artículo 17, de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado, en lo relativo a menores infractores porque, como se ha expresado, la Ley Orgánica del Consejo Tutelar para Menores es la ley especial, y como tal prevalece sobre la general, que es la otra, por lo que ninguna sanción de ningún tipo pueden dictar los tribunales de barandilla respecto de conductas antisociales de menores.-----



- - - IV. Que con relación al segundo de los aspectos a examinar en la presente resolución: el referido al proceder de los servidores públicos del Tribunal de Barandilla de Sinaloa en el procedimiento que siguen cuando es puesto a su disposición un presunto infractor del Bando de Policía y Buen Gobierno, análisis que tiene por objeto valorar si tal procedimiento es o no transgresor de derechos humanos, para lo cual el primer paso es recordar algunas disposiciones que contienen principios que, o consagran derechos en favor del individuo, o bien, establecen límites y/o condiciones al obrar de las autoridades o servidores públicos, que como bien se sabe encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte relativa dicen así:-----

"Artículo 14.

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

"Artículo 17.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

"Artículo 21.

"...compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas."



COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
SINALOA

--- Para tal fin, igualmente, es imperativo referirnos a la disposición relativa a esta materia de la Constitución Política del Estado, que es el artículo 125, que dice lo siguiente:-----

"Artículo 125.- Son facultades de los Ayuntamientos:

.....
"II. Expedir los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con las bases normativas establecidas en esta Constitución y en las leyes;"
.....

--- El ordenamiento a que se hace referencia en la última parte del precepto antes citado es, como se sabe, la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado, publicada en "El Estado de Sinaloa", órgano oficial del gobierno del Estado, de 2 de mayo de 1988, de la que es oportuno transcribir algunos de sus preceptos. Son los siguientes:--

"Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto regular la expedición, contenido y procedimientos a que se sujetarán los Bandos de Policía y Buen Gobierno de los Municipios del Estado de Sinaloa."

"Artículo 2o. Los bandos serán aprobados previa consulta popular y expedidos por los Ayuntamientos de los Municipios en cuya jurisdicción regirán, su contenido y aplicación estarán estrictamente apegados a lo dispuesto por este ordenamiento."

"Artículo 6o. Sólo serán competentes para la aplicación de los Bandos, las autoridades expresamente señaladas en esta Ley."

"Artículo 9o. En los Bandos de Policía y Buen Gobierno se deberán observar los siguientes principios:

"I. Respeto absoluto al ejercicio de los derechos individuales, sociales y políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado y en las Leyes reglamentarias de ambos ordenamientos;"
.....

"Artículo 10. Compete a los Tribunales de Barandilla el conocimiento de las faltas a los Bandos de Policía y Buen Gobierno, así como la aplicación de las sanciones correspondientes."

--- Dicha ley establece que tiene por objeto regular la expedición, contenido y procedimientos a que se sujetarán los Bandos de Policía y Buen Gobierno de los



municipios del estado de Sinaloa, mismos que, previa consulta popular, serán expedidos por los ayuntamientos en cuya jurisdicción regirán, cuyo contenido y aplicación estarán estrictamente apegados a lo estatuido por dicho ordenamiento.-

- - - Asimismo, como no podría haber sido de otro modo, dispone que en los bandos municipales se deberá observar el respeto absoluto al ejercicio de los derechos individuales, sociales y políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la del Estado y en las leyes reglamentarias de ambas constituciones. -----

- - - En lo que respecta al procedimiento que los Tribunales de Barandilla deben desahogar, lo establecen los siguientes preceptos: -----

"Artículo 32. El procedimiento ante el Tribunal se iniciará con la recepción del parte informativo de la policía sobre los hechos constitutivos de presunta infracción, con la presentación del detenido o con la denuncia de parte interesada.

"Artículo 35. Tan pronto como los detenidos o los requeridos por citatorio comparezcan ante la autoridad policiaca o ante el propio Tribunal, se le hará saber la conducta antisocial que se le imputa así como el derecho que tienen para defenderse por sí mismos o por conducto de otra persona.

"En todo caso, se les otorgará facilidades para comunicarse con su familia, con su abogado o con la persona que lo asista o lo auxilie.

"Artículo 36. El procedimiento ante los Tribunales de Barandilla será oral y público, levantando constancia por escrito de todo lo actuado. Sólo por acuerdo expreso del Tribunal la audiencia se desarrollará en privado".

"Artículo 37. El procedimiento en materia de faltas, infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se sustanciará en una sola audiencia. Estarán presentes los jueces, el secretario, el presunto infractor y su defensor, así como todas aquellas personas cuya declaración sea necesaria".

"Artículo 38. La audiencia se desarrollará en la siguiente forma:

"I. El Secretario presentará ante el tribunal al presunto infractor, informando sucintamente sobre los cargos que se le formulan;

"II. El presunto infractor alegará lo que a su derecho convenga por sí mismo o por medio de la persona que haya designado;

"III. El Tribunal recibirá las declaraciones de las personas involucradas en el caso;



"IV. El tribunal valorará las pruebas ofrecidas y dictará la resolución que corresponda; y,

"V. El tribunal les hará saber a los infractores las diferentes alternativas con que cuentan para el cumplimiento de la sanción impuesta, así como el derecho que tienen de interponer el recurso de revisión contra la resolución dictada."

- - - Los artículos 36 a 38 del ordenamiento citado, por su parte, regulan el procedimiento que los Tribunales de Barandilla deben desahogar antes, obviamente, de resolver la aplicación de alguna sanción, y no obstante su concentración --ya que se verifica en una sola audiencia-- de ser substanciado conforme lo disponen dichos numerales permitiría que el presunto infractor del Bando de Policía y Buen Gobierno ejerciera su derecho de audiencia, es decir, se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento que establece el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - - -

- - - En atención a las disposiciones de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno el Ayuntamiento de Sinaloa aprobó el Bando de Policía y Buen Gobierno para el propio municipio, mismo que fue publicado en "*El Estado de Sinaloa*", órgano oficial del gobierno del Estado, de 12 de agosto de 1994.- - - - -

- - - Dicho bando municipal contiene disposiciones de observancia obligatoria dentro del municipio, cuyo objeto es sancionar las conductas antisociales de los gobernados que no siendo constitutivas de delito alteren o pongan en peligro el orden público, atenten contra la seguridad y tranquilidad de las personas, estatuyendo, asimismo, los procedimientos y competencia de los tribunales de la materia para su aplicación, lo que, como es natural, debe guardar congruencia con las disposiciones constitucionales y legales que antes, para mayor claridad, se transcribieran.- - - - -

- - - Para continuar con este estudio, enseguida se hará el examen de algunos preceptos del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio que establecen el procedimiento de investigación que los Tribunales de Barandilla deben seguir. Son los siguientes: - - - - -

"**Artículo XVIII.**- El procedimiento ante este tribunal se iniciará con la recepción del parte informativo de la policía sobre los hechos constitutivos de la presente infracción, con la presentación del detenido o con la denuncia de parte interesada.



COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
SINALOA

“Artículo XIX.- La detención solo se justificará cuando el presunto infractor sea sorprendido en el momento de la ejecución de la falta, quien realice la detención deberá presentar inmediatamente al presunto infractor ante el tribunal de barandilla.

“Artículo XX.- Cuando no se justifique la detención o no se pueda ejecutarla, se hará la denuncia ante el tribunal, quien, si la estima fundada, girará el citatorio. En estos casos el director de seguridad pública municipal, complementará de inmediato el citatorio de referencia.

Artículo XXI.- Tan pronto como los detenidos o a los seguidos por citatorios comparezcan ante la autoridad policiaca o ante el propio tribunal, se les hará saber la conducta antisocial que se les imputa, así como el derecho que tiene para defenderse por si mismo o por conducto de otra persona.

“En todo caso se le otorgará las facultades necesarias para comunicarse con su familia, con su abogado o con la persona que el crea conveniente para que lo defienda.

“Artículo XXII.- El procedimiento será oral y público, levantando constancia por escrito de todo lo actuado. Sólo por acuerdo expreso del tribunal, la audiencia se desarrollará en privado.

“Artículo XXIII.- La audiencia se desarrollará de la siguiente forma:

- “I).- El secretario presentará ante el tribunal al presunto infractor, informando sucintamente sobre los cargos que se le formulan.
- “II).- El presunto infractor alegará lo que a su derecho convenga por si mismo o por medio de la persona que haya designado.
- “III).- El tribunal recibirá declaraciones de las personas involucradas en el caso.
- “IV).- El tribunal valorará las pruebas ofrecidas y dictará la resolución que corresponda; y
- “V).- El tribunal les hará saber a los infractores de diferentes alternativas con que cuentan para el cumplimiento de la sanción impuesta, así como el derecho que tienen de interponer el recurso de revisión contra la resolución dictada.”

- - - Los numerales del XVIII a XXIII transcritos, establecen, en esencia, el procedimiento que el Tribunal de Barandilla de Sinaloa debe desahogar para que un presunto responsable de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno pueda ejercer sus derechos de audiencia y defensa estatuidos por los artículos 14; 16, primer y cuarto párrafos, y 20, apartado A, fracciones V; VII y IX, de la



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos que se traducen en que dicho tribunal, como lo dispone el Bando, haga saber al inculpado la causa por la que se tramita procedimiento en su contra, el derecho que tiene para nombrar una persona de su confianza o abogado para que lo defienda, así como el de que el tribunal valore el material probatorio que se presente por la policía preventiva y/o por el ofendido de la conducta antisocial, así como el que aporte el inculpado o su defensor para, con apego al principio de congruencia que debe de regir en toda decisión materialmente jurisdiccional, dicho tribunal dicte la resolución que corresponda.-----

--- Sin embargo, a pesar de tales disposiciones, esta Comisión advirtió que en los expedientes examinados por personal de este organismo a título de muestra, mismos que correspondieron a los de los señores **C4 Y C5**

, no hay constancia alguna de que se les hubiera hecho saber el derecho de defensa que la Constitución y la legislación secundaria otorgan a todo detenido dentro de ese procedimiento; tampoco obra constancia o dato alguno de que se les hubiere notificado que podían llamar a un familiar o persona de su confianza para que los defendiera, en el supuesto, claro, de que no lo hicieran por sí mismos, así como del derecho de interponer el recurso de revisión en contra de la resolución dictada en su contra, en caso, desde luego, de que no estuvieran conforme con la misma.-----

--- Tampoco se advirtió cuál fue la multa que les fue impuesta, por lo que ello fue obstaculo para determinar si la sanción aplicada fue o no conforme a derecho, es decir, si la actuación del Juez del Tribunal de Barandilla se ajustó o no a lo dispuesto por el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y tercero, que estatuyen que si los infractores son jornaleros u obreros no podrán ser sancionados con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día, y que en tratándose de trabajadores o personas no asalariadas la multa no podrá exceder del equivalente de un día de su ingreso, precepto que podría haber sido transgredido al cobrárseles una multa excesiva con relación a sus condiciones económicas.-----

--- Ambos tipos de situaciones evidencian que el tribunal no apega su proceder a lo que disponen los artículos 14; 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tampoco de lo que estatuyen los numerales 36 a 38, de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado, como tampoco se observan los artículos del XVIII al XXIII del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio,



todo ello en el procedimiento que se instaura en contra de los presuntos responsables de infracciones a reglamentos administrativos --si es que a esas actuaciones puede calificárseles como "procedimiento"-- transgrediendo así los derechos humanos al debido proceso legal y a la legalidad de los detenidos, como es el caso de los señores

C4 Y C5

que fueron examinados al azar y desde luego, a título de muestra.-----

--- V. Que examinado de manera sumaria el marco jurídico que, en concepto de esta Comisión resulta aplicable a la actuación de servidores públicos del Tribunal de Barandilla de Sinaloa, es necesario hacer las siguientes precisiones: -----

--- A) Está demostrado que dicho Tribunal ha conocido de casos de menores que indebidamente fueron puestos a su disposición --y más indebido aún que haya ejercido actos de autoridad respecto de ellos-- ya que según las respuestas que el licenciado

SP3

, Juez del Tribunal de

Barandilla, diera a las preguntas 2, 4 y 5, del cuestionario escrito, formulado exprofeso por el Visitador de esta Comisión, manifestó que dicho Tribunal había conocido de casos de menores de edad, lo cual se constató al examinarse los expedientes de los menores

C1, C2 Y C3

, de **** años de edad,

respectivamente, contrariando con tales actos lo estatuido por los artículos 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, último párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, y 76, de la Ley Orgánica del Consejo Tutelar para Menores, que como se ha razonado deben prevalecer sobre lo dispuesto por el artículo 17, de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado. -----

--- Lo anterior no significa que esta Comisión abogue por la impunidad de menores que hubiesen incurrido en violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio y que amparados en ello las sigan cometiendo, sino únicamente que los mismos sean sancionados por la autoridad competente, que de acuerdo con lo estatuido por la ley de la materia es el Consejo Tutelar para Menores, en la especie a través de su delegado en el municipio. -----

--- B) Asimismo, quedó acreditado que dicho Tribunal no apega su proceder en el procedimiento de cognición en contra de los presuntos responsables de faltas administrativas a lo que disponen los artículos 14; 16, primer y cuarto párrafos, y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,



como tampoco lo que estatuyen los artículos 36 a 38, de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado, transgrediendo los derechos humanos al debido proceso legal y a la legalidad. -----

--- VI. Que con relación a lo anterior, resulta oportuno citar el precepto de la Ley Orgánica Municipal del Estado que estatuye, entre otras, las atribuciones de los Presidentes Municipales, que en el caso que nos ocupa, son las que enseguida se transcriben:-----

“Artículo 31. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las siguientes:
.....

“III. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de los diversos ordenamientos municipales;
.....

“V. Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, salvo lo dispuesto en el artículo 65, fracción III, de la Constitución Política del Estado, en este último supuesto, tendrá la facultad de proponer la designación del titular de la seguridad pública municipal, al Gobernador del Estado.

“VI. Imponer multas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, pero si el infractor no pagare la multa ésta se permutará por el arresto correspondiente que en ningún caso excederá de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de un día de salario. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

“En caso de infracciones en materia de tránsito, se aplicarán las sanciones que establezcan las disposiciones legales conducentes;”
.....

--- El numeral anterior estatuye, entre otras, tres atribuciones de los presidentes municipales, que son: la primera, y quizá la más importante, cumplir y hacer cumplir los diversos ordenamientos municipales que rigen en el territorio del municipio; la segunda, controlar la policía preventiva y de tránsito correspondiente, salvo la excepción prevista en el artículo 65, fracción III, de la Constitución Política del Estado, es decir, en el territorio donde habitual o territorialmente resida el gobernador del Estado, en cuyo caso tendrá la facultad de proponer su designación, y, finalmente, la tercera de tales atribuciones es la de calificar e imponer sanciones a los infractores de los bandos municipales de policía y buen



gobierno, a través del órgano competente, haciendo las consideraciones correspondientes para quienes fuesen jornaleros, obreros, trabajadores o personas no asalariadas, así como para quienes infrinjan las disposiciones legales en materia de tránsito.-----

--- Dicho artículo estatuye las atribuciones de los presidentes municipales, entre las que destaca, desde el punto de vista genérico, el deber de legalidad, formulado en el imperativo de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de los diversos ordenamientos municipales.-----

--- Ciertamente, el precepto, de manera textual, se refiere a la obligación de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de los ordenamientos municipales, esto es, de los expedidos por el propio Ayuntamiento, pero eso no significa que su deber de legalidad se constriña a eso, y no tenga la obligación de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de ordenamientos de otra naturaleza, estatales o federales, que le impongan alguna obligación, pues ello deviene ineludible de acuerdo con la protesta rendida de cumplir y hacer cumplir la Constitución, tanto la de la República como la del Estado, así como las leyes derivadas de una u otra, en los términos de lo dispuesto por los artículos 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 144, de la Constitución Política del Estado, y cumplir leal y patrióticamente con el encargo que les fuera conferido, compromiso que jurídica, política y moralmente obliga al acatamiento de lo que las mismas establecen, y ya hemos visto lo que los ordenamientos aplicables en la materia disponen.-----

--- VII. Que si a los razonamientos expuestos, que como es natural son esencialmente jurídicos, se quisiera agregar alguna consideración de orden filosófico para fortalecer la convicción por la obediencia que se debe al Derecho, fundamentalmente por parte de gobernantes, que deben ser los más interesados en hacer prevalecer el estado de Derecho, nos servirán las palabras de Friedrich Meinecke, que acertadamente dice así:-----

“En todo caso, el mismo Estado tiene un interés propio en obedecer al Derecho que el mismo promulga y en fomentar con su propio ejemplo la moral civil en el interior. La moral, el Derecho y la fuerza pueden por eso funcionar armónicamente en el interior del Estado.”

--- De conformidad con los resultados expuestos y atentos a las consideraciones formuladas en los puntos precedentes, esta Comisión concluye que en el caso de



la investigación que hoy se resuelve es de dictarse, y por ello se dicta, la siguiente:-----

-----**RESOLUCION**-----

--- Formúlese Recomendación al Presidente Municipal de Sinaloa.-----

--- En virtud de lo antes resuelto, con fundamento en lo prevenido por los artículos 14; 16; 17, segundo párrafo; 21 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 bis, de la Constitución Política del Estado; 1o.; 2o.; 3o.; 7o.; 16 y 28, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 20, fracción I, y 31, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, y 36 a 38 de la Ley que Establece las Bases Normativas para la Expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno del Estado; este organismo formula al Presidente Municipal de Sinaloa, las siguientes:-----

-----**RECOMENDACIONES**-----

--- **PRIMERA.** Ordene a los servidores públicos del Tribunal de Barandilla de ese municipio que se abstengan de imponer sanciones administrativas a menores infractores al Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio por carecer de competencia para ello.-----

--- **SEGUNDA.** Asimismo, ordene al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que los menores que sean sorprendidos en flagrancia actualizando alguna o varias figuras especificadas por el Código Penal y/o leyes penales especiales o infringiendo el Bando de Policía y Buen Gobierno, sean puestos de inmediato a disposición del delegado del Consejo Tutelar para Menores, nunca del agente del Ministerio Público ni tampoco del Tribunal de Barandilla. -----

--- **TERCERA.** Instruya a los servidores públicos del Tribunal de Barandilla que en el desahogo de los procedimientos a su cargo se garantice, por lo menos, que los presuntos infractores del propio Bando municipal puedan ejercer los derechos de audiencia y defensa que les asisten; que se les haga saber la causa por la que se tramita procedimiento en su contra; el derecho que tienen para nombrar a una persona de su confianza o a un abogado para que los defienda; del que les asiste para interponer recurso de revisión en contra de la resolución que se dicte en su contra, en el supuesto, claro, de no estar de acuerdo con la misma, y se elabore



constancia de tales actuaciones, de conformidad con lo que establece el artículo XXII, del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese municipio.-----

--- **CUARTA.** En atención a lo establecido por los artículos 1o.; 3o., fracción IV; 47, fracciones I y XIX, y 48, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, instruya a la entidad municipal que corresponda inicie procedimiento de investigación orientado a determinar quién o quiénes fueron los responsables de las transgresiones a los derechos humanos citadas en esta resolución y, en su caso, se les sancione administrativamente.-----

*

--- La presente resolución reviste, como es claro, el carácter de *recomendación*, lo que autoriza a reflexionar, así sea someramente, sobre la auténtica naturaleza jurídica de éstas.-----

--- En el orden constitucional, tanto el artículo 102, apartado B, de la carta magna, como el 77 Bis, de la ley fundamental del Estado, señalan que las recomendaciones de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos tienen el carácter de ser *no vinculatorias*, pues ciertamente no se les puede equiparar a una sentencia, que eventualmente, en caso de no acatarse, podría ser impuesta por medio de la fuerza pública, pero de eso a que las recomendaciones de estos organismos puedan ser tomadas o dejadas, sin más, esto es, libremente, por las autoridades destinatarias, bajo el insulso argumento de que únicamente tienen "*fuerza moral*", media un mundo de diferencia.-----

--- Esa fuerza la tendrán, sin duda, en la medida del prestigio de la institución que las emita, pero no únicamente en ella radicará la fuerza de las recomendaciones; también tienen, indiscutiblemente, fuerza jurídica, que será tanta como tanta sea la honestidad, convicción y congruencia de las autoridades destinatarias con el respeto al estado de Derecho.-----

--- Y esa fuerza que desde el punto de vista jurídico tienen las recomendaciones del *ombudsman*, independientemente de que resulten inequívocas a una sentencia, deriva no sólo de que se trata de organismos creados constitucionalmente para investigar actos u omisiones de carácter administrativo presuntamente violatorios de los derechos humanos, provenientes de cualquier



autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, es decir, para procurar que el poder se ejerza dentro de los límites de la racionalidad legal. -----

- - - Si en ejercicio de esa atribución un organismo de tal naturaleza llega a la convicción de que un determinado servidor público transgredió diferentes disposiciones jurídicas y, por ende, incurrió en violación de derechos humanos, y justamente por ello se formula una recomendación al titular de la dependencia o institución a la que desde el punto de vista laboral se encuentre adscrito, tal autoridad no tiene, a juicio de esta CEDH, más alternativa que la de acatar la recomendación o demostrar que la misma carece de sustento, adolece de congruencia o por cualquiera otra razón resulte inatendible. -----

- - - Lo anterior es así en función, en primer lugar, del carácter supremo de la Constitución, y por ende de los derechos humanos, habida cuenta que los fundamentales se encuentran consagrados en la misma, en su mayor parte dentro del capítulo denominado "*De las garantías individuales*", debiendo puntualizarse que el carácter supremo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos --ese es su nombre oficial-- deriva no sólo de su carácter fundamental, sino de que ella misma, de manera expresa, en su artículo 133, establece tal categoría. -----

- - - En segundo lugar, porque todos los servidores públicos, antes de tomar posesión de su cargo, rinden protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución --tanto la general de la República como la del Estado-- así como las leyes derivadas de una y de otra, de modo que frente a una recomendación, si deciden no aceptarla, pero tampoco expresan las razones de su negativa, o expresándolas no las acreditan, estarían, en principio, faltando a las obligaciones que implica la protesta, y eventualmente en solapamiento o encubrimiento. -----

- - - En tercer lugar, porque todos los servidores públicos, estén investidos o no de autoridad, están obligados a responder por escrito las recomendaciones, y además, en los términos del artículo 16 de la ley suprema, así como de multitud de reiteradas tesis jurisprudenciales, están obligadas a motivar y fundamentar todos sus actos, de modo que si la autoridad destinataria de una recomendación decide no aceptarla, tiene, necesariamente, que motivar y fundamentar su resolución, lo que significa que tiene que demostrar, uno a uno, que los argumentos que sustentan la recomendación son falsos o inidóneos, carecen de



congruencia o por cualquiera otra razón o circunstancia, la recomendación resulte inatendible. -----

- - - En cuarto lugar, porque todos los servidores públicos, en los términos establecidos por los artículos 109, fracción III, y 113, de la constitución general de la República, están obligados a observar los principios de *legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia* en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, principios que reitera el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, y todo ello, aunque parezca poco, es mucho, particularmente para aquellas personas cuyo único poder radica en la legalidad, que es, como bien se ha dicho, el único poder de los sin poder: la observancia plena, cabal y puntual de la ley. -----

- - - La autoridad destinataria de una recomendación, pues, podrá, sin dudas de ninguna especie, no aceptarla, pues los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos no son infalibles, pero tiene, *n e c e s a r i a, i n e x c u s a b l e m e n t e* que motivar y fundamentar su resolución, refutando uno a uno los elementos en que se apoya la recomendación, pero lo que no puede hacer, sin*incurrir en responsabilidad, es no contestar, o contestar no aceptando la recomendación sin expresar razón alguna de su negativa. -----

- - - El estado de Derecho es algo más, mucho más, que la simple existencia de ordenamientos jurídicos; el estado de Derecho supone y exige la observancia de la ley por todos y en todos los casos; señaladamente de las autoridades, de modo de que el poder quede, efectivamente, sometido al Derecho; no se puede admitir la violación de la ley, mucho menos de la Constitución, ni por razones de Estado, ni bajo el dudoso argumento de que es para hacer el bien, según el criterio de quien actúa u ordena, pues después se violaría con cualquier pretexto; se ha dicho y se repite con relativa frecuencia, que nadie está al margen o por encima de la ley; si eso es así, las recomendaciones del *ombudsman*, con todo y ser *no vinculatorias*, tienen esa fuerza jurídica que deriva del estado de Derecho, que impide que una autoridad pueda obrar en forma caprichosa. -----

- - - Esa es, pues, a juicio de este organismo, la verdadera naturaleza de las recomendaciones del *ombudsman*, y esta Comisión confía en que tales argumentos, que no son sino una breve traducción de diferentes principios



constitucionales, sean cabalmente entendidos y tengan, en la especie, una aplicación puntual. -----

*

--- Por otra parte, en los términos de lo estatuido por el artículo 62, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, se dictan los siguientes: -----

----- **ACUERDOS** -----

--- **PRIMERO.** Notifíquese al C. Presidente Municipal de Sinaloa, en su calidad de autoridad destinataria de la presente recomendación, misma que en los archivos de esta Comisión ha quedado registrada bajo el número 041/01, debiendo remitírsele, con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la misma, con firma autógrafa del suscrito, para su conocimiento y efectos procedentes.-----

--- **SEGUNDO.** En el oficio de notificación que al efecto se formule para el C. Presidente Municipal de Sinaloa, como autoridad destinataria de esta Recomendación, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 58, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señálesele plazo para la contestación de la presente Recomendación, así como otro adicional para la entrega de las pruebas relativas al cumplimiento de la misma, en el supuesto de que sea aceptada.-----

--- **TERCERO.** En la notificación correspondiente, puntualícese a la autoridad destinataria que en caso de que acuerde no aceptar la presente Recomendación, la decisión respetiva deberá motivarla y fundamentarla debidamente, expresando una a una sus contraargumentaciones, de modo tal que demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o por cualquiera razón resulten inatendibles, todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes, específicamente, en el caso de los servidores públicos, así como de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la general de la República que la del Estado, así como de las leyes que de una y otra hubieren emanado.-----

--- Así lo resolvió, y firma para constancia, el Licenciado JAIME CINCO SOTO, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.---



Handwritten signature in black ink over a purple official stamp. The stamp features a circular emblem with a scale of justice and a laurel wreath, with the text 'Comisión Estatal de Derechos Humanos' below it.